



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SETENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.

Veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

RADICADO: 1100140030702021-00587-00
PROCESO: EJECUTIVO
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE CONSUMO COOERMAR
EN LIQUIDACION EN INTERVENCION
DEMANDADO: CARLOS ALBERTO LONDOÑO GÓMEZ

I. ASUNTO A RESOLVER

En virtud a que el trámite se surtió en debida forma procede el Juzgado a proferir la correspondiente sentencia, resolviendo las excepciones de mérito que en su oportunidad propuso el curador ad litem del demandado, de conformidad con lo normado en el artículo 278 del Código General del Proceso.

1. ANTECEDENTES Y PRETENSIONES

La entidad demandante, actuando por conducto de apoderado judicial, solicitó se librara orden de pago a su favor y en contra de CARLOS ALBERTO LONDOÑO GÓMEZ, por concepto del no pago de una suma de dinero contenida en un pagaré base de recaudo.

2. TRÁMITE

Cumplido los requisitos de ley mediante providencia de fecha Veintitrés (23) de julio del dos mil veintiuno (2021), se libró mandamiento de pago en la forma solicitada a su favor y en contra de CARLOS ALBERTO LONDOÑO GÓMEZ, providencia que les fue notificada a través de curador ad litem designado.

En cuanto el demandado CARLOS ALBERTO LONDOÑO GÓMEZ a través de curador ad litem, quien dentro del término contestó la demanda y propuso medios exceptivos denominados (i) Prescripción.

En cuanto al demandante recorrió traslado de la contestación y de la excepción de mérito propuesta por el demandado.

Por lo expuesto anteriormente, esta Servidora Judicial procede a proferir la decisión que en derecho corresponda.

3.PRESUPUESTOS PROCESALES.

Se evidencia la presencia de los presupuestos procesales, capacidad para ser parte, capacidad para comparecer en el proceso, demanda en forma y competencia de este juzgado para dirimir la controversia.

Proceso ejecutivo.

El artículo 422 del Código General del Proceso expone: “pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley”. [Se subraya].

Es decir, que el proceso ejecutivo como presupuesto necesario para su formulación, requiere la presencia de un derecho cierto y determinado del cual se pretenda su satisfacción en la demanda, certidumbre que debe emanar del título del cual se persigue su ejecución, de manera que el instrumento allegado con el libelo inicial debe reunir los requisitos que perentoriamente exige la norma en cita.

En el sub judice, apreciase que el demandante aportó como venero de la acción un PAGARÉ, instrumento negociable cuyos elementos constitutivos están condensados en el artículo 622 del Código de Comercio, Así mismo, en las características específicas concernientes al pagaré, según el artículo 709 ídem, el documento aportado debe contener: la promesa incondicional de pagar determinada suma dineraria; el nombre del acreedor; la orden de pago y la forma de vencimiento de la obligación. Requisitos sin los cuales la obligación es inexistente.

4. PROBLEMA JURÍDICO

Señalado lo anterior, le corresponde al despacho, en primera medida determinar la prosperidad de las excepciones propuestas o en caso negativo seguir adelante la ejecución.

5. EXCEPCIONES

Jurisprudencial y doctrinalmente se ha establecido que la excepción no es otra cosa que una institución creada como mecanismo de defensa de la parte demandada frente a las súplicas o pretensiones del actor, la cual se caracteriza y define por dos aspectos fundamentales, cuales son: a) el derecho que se tiene para alegarla y, b) las pruebas en que esta se soporte.

Las excepciones propuestas, para enervar las súplicas del oponente, deben estar fundamentadas sobre las pruebas oportuna y regularmente aportadas al proceso, pues sobra señalar que de nada sirve estar amparado por un derecho que se supone perfecto, sino se allegan las pruebas que lleven al fallador a la certeza jurídica de que éste ha sido debidamente demostrado mediante el uso de los mecanismos probatorios determinados por la ley.

Así mismo, de conformidad con la preceptiva contenida en el artículo 167 el Código General del Proceso, el ejecutado tiene la obligación procesal de demostrar los hechos sobre los cuales se cimentó la excepción formulada.

1. De la prescripción

Por lo tanto, descendiendo al asunto sub examine, compete a este Juzgador adentrarse en el análisis de las excepciones propuestas de la prescripción de la acción cambiaria.

Al respecto, señala el artículo 2512 del Código civil:

La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción.

En este orden de ideas tratándose de acciones ejecutivas cuyo fundamento recae en un título valor -pagaré - resulta aplicable las disposiciones del artículo 789 del Código de Comercio que al efecto reza;

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. La acción cambiaria directa **prescribe en tres años a partir del día del vencimiento.**

Pese a lo expuesto anteriormente, señala el artículo 2539 del Código Civil: La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2524; la interrupción natural acontece cuando el deudor en forma expresa o tácita reconoce la obligación; la civil tiene lugar cuando se interpone o

formula la demanda judicial, con los requisitos de que trata el art. 94 del Código General del Proceso, quien al respecto señala:

Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.

Implica lo anterior que, para considerar civilmente interrumpido el término de prescripción del derecho o acción respectivo se deben dar los siguientes requisitos:

- 1.) Que la demanda se presente antes de que el derecho haya prescrito;
- 2.) Que el auto de mandamiento de pago se notifique al demandado directamente o a través de curador ad litem, si ello fuere necesario;
- 3.) Que la notificación a la parte pasiva se verifique dentro del año siguiente a la fecha en que se notifique el actor personalmente o por estado del auto de mandamiento de pago. Si no se cumplen tales presupuestos el término de prescripción correrá ininterrumpidamente considerándose interrumpida solo cuando se notifique al extremo pasivo del auto de apremio.

Con fundamento en lo antes citado ha señalado la Doctrina:

La interrupción de la prescripción derivada de la notificación del mandato de pago trae como efecto la pérdida del tiempo transcurrido entre la exigibilidad de la obligación y aquella fecha; sin olvidar que es consecuencia, también propia de la interrupción que el lapso de extinción por el inejercicio del derecho comienza nuevamente a contarse, puesto que el resultado de la interrupción “ es la prescindencia del todo el tiempo de inercia corrido hasta entonces, de modo que el computo se reinicia, con la posibilidad prácticamente indefinida de que se repitan los fenómenos, hasta que el término respectivo transcurra íntegramente”¹

Centrados en el debate propuesto, habrá de señalarse en primera medida que, atendiendo la literalidad del título valor allegados pagaré los tres años a los que alude el artículo 789 del Código de Comercio, se contabilizará así:

En este orden, según el pagaré No 1472 aportado tiene como fecha de creación 15 de mayo de 2012 pactado a plazos de 24 cuotas es decir 24 meses valor de cada cuota de \$92.334,00 a partir del 15 de julio de 2012, cuyo vencimiento de la última cuota es 15 de julio de 2014.

Luego entonces, los tres años a los que alude el artículo 789 del Código de Comercio, fenecía **el 15 de julio de 2017, entonces como** la demanda fue

¹ Teoría y practica de los Procesos Ejecutivos, Armando Jaramillo Castañeda, Pág.156

presentada según acta de reparto el 21 de mayo de 2021, es decir, que para la fecha de presentación de la demanda el título valor pagaré se encontraba prescrito previa presentación de la demanda.

Muy a pesar de los argumentos esbozados por la demandante, precisando que por una situación de presunto ocultamiento de parte del demandado CARLOS ALBERTO LONDOÑO GOMEZ, y omitir su pago, desconociendo de forma directa que no se le hacían sus descuentos pertinentes, obligó a que se procediera a iniciar una acción ejecutiva en su contra.

Pues nótese, que trascurrieron mas de 7 años para que la demandante accionará el proceso ejecutivo a fin de hacer efectivo el pago de la obligación contenida en el pagaré adosado.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SETENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de *prescripción de la acción cambiaria* y, como consecuencia de ello se ORDENA la TERMINACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO DE MINÍMA CUANTÍA instaurado por la COOPERATIVA DE CONSUMO COOERMAR EN LIQUIDACION EN INTERVENCION y en contra de CARLOS ALBERTO LONDOÑO GÓMEZ, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares decretadas, en caso de existir solicitud de remanentes, póngase a disposición del Despacho Judicial que las solicita. Ofíciase a quien corresponda.

TERCERO: De existir dineros títulos de depósitos judiciales a órdenes de este Despacho y para el proceso de la referencia los mismos entréguese a la parte demandada en las proporciones que les fueron descontados.

CUARTO: CONDENAR a la parte demandante, al pago de las costas a favor de la parte demandada. Líquidense por secretaría las mismas, incluyendo como agencias en derecho, la suma de DOCIENTOS MIL PESOS (\$200.000).

QUINTO: Cumplido lo anterior, archívese el expediente, en virtud a los dispuesto en el Art. 122 del C.G. del P., dejando las anotaciones del caso.

Notifíquese y cúmplase, (1)

GLENDALLETICIAMOYAMOYA
JUEZ

Notificación por estado: la providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 035 del 29 de mayo de 2024

la secretaria LYNDALAYDALÒPEZBENAVIDES

Firmado Por:
Glenda Leticia Moya Moya
Juez
Juzgado Municipal
Civil 070
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4f25ebbfac25c67ebc1c64f7f97ba3471ee59ec7d963f41f0ebc37d45b975b1b**

Documento generado en 28/05/2024 04:42:29 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>